

Roj: STSJ MAD 1153/2002  
Id Cendoj: 28079330012002101463  
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1505/1996  
Nº de Resolución: 107/2002  
Procedimiento: CONTENCIOSO  
Ponente: ALFREDO ROLDAN HERRERO  
Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID  
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  
SECCION PRIMERA  
RECURSO Nº 1.505/96

**SENTENCIA Nº 107**

PRESIDENTE:

D. Alfredo Roldán Herrero

MAGISTRADOS:

Dª. Clara Martínez de Careaga y García

Dª. Fátima Arana Azpitarte

D. Fernando de Mateo Menéndez

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. María Jesús Vegas Torres

En Madrid, a veintiocho de enero de dos mil dos.

Vistos los autos del recurso número 1.505/96 que ante esta Sala ha promovido el Procurador D. Jorge Laguna Alonso, en nombre y representación de D. Ángel Daniel , sobre depósito de armas. Ha sido parte la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO representada por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Alfredo Roldán Herrero.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Por el recurrente expresado se interpuso recurso contencioso- administrativo mediante escrito presentado en fecha 24-5-96, acordándose su admisión en fecha 4-12-96, con todo lo demás procedente en derecho.

SEGUNDO.- En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó demanda mediante escrito presentado en fecha 22-4-97, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho oportunos, suplicó la estimación del recurso, con la consiguiente anulación de los actos recurridos.

TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito presentado en fecha 14-7-97, en el cual suplicó la desestimación del recurso.

CUARTO.- No solicitado el recibimiento a prueba, se dio traslado para conclusiones a las partes quienes alegaron lo conveniente y se señaló para votación y Fallo el día 24-1-02 en que tuvo lugar.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 11-5-95 que acordó el depósito del rifle FEG modelo **semiautomático** propiedad del recurrente D. Ángel Daniel .

SEGUNDO.- El actor era propietario del arma referida y se acordó su depósito en la Intervención de Armas por no ajustarse a las características del Reglamento aprobado por R.D. 137/93 de 29 de enero. El art. 6 de dicho Reglamento considera armas de **guerra** aquellas cuyo **calibre**, aún siendo inferior a 20 milímetros, merezcan la consideración como tales por el Ministerio de defensa. En desarrollo de esta remisión reglamentaria, la O.M. de 29-7-93 incluyó entre los calibres de **guerra** el 7 62 x 39 salvo que se trate de armas de repetición para caza mayor. El arma cuyo depósito se acordó era de ese **calibre** y no era de repetición sino semiautomática y para los supuestos en que se tratase de armas poseídas legalmente hasta entonces y dejasen de serlo por la aprobación del Reglamento, su Disposición Transitoria Segunda establecía un plazo de dos años para adaptarse el titular a la nueva regulación. Este fue el caso del recurrente y nada hizo durante el período transitorio para regularizar su situación.

TERCERO.- Sometido el régimen de tenencia, fabricación y comercialización de armas al monopolio del Estado conforme al art. 149-1-26 C.E., el art. 6-1 de la L.O. 1/92 de 21 de febrero de Seguridad Ciudadana delega en la Administración el desarrollo reglamentario de esta materia y en su cumplimiento se dictó el R.D. 137/93 ya mencionado.

CUARTO.- Frente al acuerdo administrativo el actor invoca preceptos constitucionales de más que dudosa aplicabilidad. Así refiere el art. 24 C.E. alegando una suerte de indefensión referida exclusivamente a que se le deja sin posibilidades de defender una propiedad que adquirió con todas las bendiciones y amparada por las oportunas licencias, y ello lo enlaza con la interdicción de lo que llama una expropiación no acordada por los procedimientos legales (art. 33 C.E.). Después proclama la irretroactividad (art. 25 C.E.) y exige el respeto a los derechos adquiridos. Para responder conjuntamente a estas motivaciones hemos de partir del dato de que la medida adoptada goza de habilitación bastante en las normas que hemos reseñado en el precedente fundamento. Conforme a ellas no hay realmente una expropiación, sino la ilegalización de lo que antes era legal, con la lógica consecuencia de vedarse la tenencia y uso de aquello que se ilegaliza, lo cual es en un todo coherente, y no hay aplicación retroactiva de una norma porque para nada se considera ilegal la adquisición y tenencia anterior, ni se sanciona por ello, tan sólo se adoptan medidas de futuro para, como dice el preámbulo del Reglamento, adaptarse a las nuevas circunstancias nacidas del progreso de la técnica que incorpora continuamente al mercado nuevos tipos y modelos de armas o perfecciona sustancialmente las existentes, y también para corregir deficiencias en la normativa vigente hasta el momento y que la práctica ha demostrado no era adecuada o producía disfuncionalidad para la consecución de los objetivos perseguidos por aquellas normas que se derogan o modifican. Ciertamente la aplicación de las nuevas especificaciones puede producir un perjuicio pero su reparación no pasa por perpetuar la ilegalidad. El incremento en la exigencia de medidas de protección, seguridad o control es algo común en todos los ámbitos de la actividad y su implantación o refuerzo de las existentes, en tanto sean razonables, no puede eludirse.

QUINTO.- Por todo lo dicho hemos de rechazar la pretensión, sin que existan razones para una expresa condena en costas, y en consecuencia,

## FALLAMOS

Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Jorge Laguna Alonso, en representación de D. Ángel Daniel , debemos declarar y declaramos ajustado a derecho el acto recurrido, sin costas.

Contra la presente no cabe recurso ordinario alguno.

Así por esta, nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado D. Alfredo Roldán Herrero, celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.